

Gobierno de Gibraltar

Eco de prensa: “The Wall Street Journal” y “Le Figaro”

Editorial de “The Wall Street Journal” del 6 de agosto 2013, publicado en sus ediciones europea y estadounidense

España aprieta al Peñón.

Madrid codicia Gibraltar, pero haría mejor en imitarlo.

En algunas ocasiones, una semana puede ser mucho tiempo en política, pero en otras 300 años no bastan. El 13 de julio de 1713, España y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Utrecht, en virtud del cual España cedió Gibraltar a los británicos “para siempre, sin excepción ni impedimento alguno”. Madrid continúa inventando impedimentos.

La última polémica tuvo lugar el mes pasado, después de que Gibraltar construyese un arrecife artificial cerca de su costa. Esto ha tenido el efecto, intencionado o no, de obstruir la pesca de arrastre española en las aguas que rodean al Peñón. España ha respondido ralentizando los controles en la frontera con Gibraltar. El Ministro de Asuntos Exteriores español también ha sugerido que su gobierno podría imponer una tasa de €50 por cruzar la frontera – ostensiblemente para recaudar fondos para compensar a los pescadores. Incluso se han escuchado propuestas desde Madrid para cerrar el espacio aéreo español a los vuelos a y desde el Peñón.

La desavenencia real es que España no acepta que Gibraltar no le pertenezca. El fallecido dictador Francisco Franco cerró la frontera en 1965 y aún hoy en día puede llevar horas cruzar la frontera en coche. España esgrime las compras libres de impuestos en Gibraltar como pretexto para retener el tráfico. Este asunto viene de muy lejos; tanto como el Artículo X del Tratado de Utrecht, el cual menciona el riesgo de que Gibraltar sea utilizado como base por parte de contrabandistas.

¿Qué hacer al respecto? El pueblo de Gibraltar apoya mayoritariamente su pertenencia al Reino Unido – en una proporción de casi 99 a 1 la última vez que se llevó a cabo una consulta, en 2002. La condición de Gibraltar como territorio libre de impuestos resulta vital para la economía local puesto que, aunque pertenece a la UE, está fuera de la unión aduanera y no comparte sus requisitos mínimos en materia de IVA. Convertirse en otro rincón andaluz más perjudicaría gravemente la situación de Gibraltar como destino de compras, a la vez que aportaría muy poco para solucionar los problemas económicos de España.

No cabe duda de que el gobierno de Madrid prefiere hacer sonar los tambores del nacionalismo antes que hablar sobre la economía nacional, pero estas distracciones no conducen a nada. El Primer Ministro británico, David Cameron, ha reiterado esta semana que

el Reino Unido jamás entrará en negociaciones sobre el Peñón mientras sus residentes quieran seguir siendo británicos.

Con un PIB per cápita casi el doble que el de sus vecinos españoles y una tasa de desempleo del 3% comparada con un 26% al norte de la frontera, parece poco probable que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Quizás una opción mejor para España sería intentar integrarse más en Gibraltar – al menos adoptando su modelo económico de bajos impuestos y libre comercio.

Editorial de “Le Figaro” del 6 de agosto 2013

Gibraltar: un nuevo brote de tensión entre Madrid y Londres

Debido a algunos bloques de hormigón arrojados al mar, la pequeña guerra entre Madrid y Londres por del peñón de Gibraltar está a punto de renacer. España se ha posicionado a favor de sus pescadores y multiplica el acoso contra los residentes de este enclave británico de 7 kilómetros cuadrados situado en el extremo sur de la península Ibérica. Los conservadores españoles, que desde su ascensión al poder en 2011 adoptaron el lema "¡Gibraltar español!", son acusados por el Reino Unido de tomar medidas "desproporcionadas". "Profundamente preocupada", Londres desea "una explicación".

Gibraltar: la guerra del Peñón se ha reavivado

Posicionado a favor de sus pescadores, Madrid multiplica las represalias contra el enclave británico.

ESPAÑA: Unos bloques de hormigón están causando crispación entre españoles, británicos y unos 30.000 ciudadanos locales por un territorio de menos de 7 kilómetros cuadrados: Gibraltar. Madrid habla de que "se ha acabado del recreo", mientras que Londres amenaza con tomar "todas las medidas posibles" y las autoridades del Peñón denuncian "reminiscencias del régimen fascista de Franco". El enclave del Reino Unido ubicado en el extremo sur de España —un asunto recurrente en las relaciones entre los dos países desde su cesión en 1713— ha vivido una semana de abundantes declaraciones patrióticas, actitudes orgullosas y fanfarronerías.

En el origen del problema se encuentra la decisión del Gobierno local de tirar al mar 70 bloques de hormigón recubiertos con barras de ferralla. Según Gibraltar, se trata de crear un arrecife artificial para evitar la pesca de arrastre y atraer a los peces. La técnica también ha sido utilizada por los españoles en la costa de la ciudad vecina de La Línea de la Concepción.

Los pescadores españoles, acostumbrados a ser víctimas colaterales del interminable conflicto, lo ven como una medida para evitar que faenen en las aguas de Gibraltar, cuya soberanía está en disputa. Y el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho suyas sus quejas. Desde que llegó al poder en noviembre de 2011, los conservadores españoles han recuperado el viejo grito de "¡Gibraltar español!", un lema que toca la fibra de su electorado tradicional.

Medidas "desproporcionadas"

Más allá de las palabras, Madrid ha adoptado una serie de decisiones que llegan a confundirse con represalias. En primer lugar, implantar una estricta vigilancia en la Verja; una frontera que cruzan miles de personas a diario. La intensificación de los controles aumenta en gran medida

las colas (que, la semana pasada, llegaron a ser de hasta seis horas). La técnica —sencilla, eficaz y legal— es todo un clásico en el Peñón. “Es nuestra obligación controlar a rajatabla el contrabando, el blanqueo de dinero y el tráfico ilícito”, asegura el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, en una entrevista al diario ABC. Es como si, tal y como afirma El País con tono jocoso, Gibraltar fuera “una cueva de piratas, un nido de contrabandistas y un paraíso para defraudadores”.

Asimismo, Madrid ha bloqueado el paso de seis hormigoneras en la frontera y ha denunciado a las empresas implicadas ante la justicia española y la Comisión Europea. García-Margallo ha lanzado la idea de imponer una tasa de 50 euros por la entrada y salida de cada vehículo. Un impuesto justificado por los atascos que se forman en la frontera... a causa de los controles realizados por la policía española. El Gobierno español también amenaza con reforzar los controles fiscales, revisar la concesión de 60.000 líneas telefónicas, regular el floreciente negocio de las apuestas *online* o incluso restringir el tráfico aéreo.

Numerosas medidas “desproporcionadas”, afirma Londres, que ha llamado a consultas al Embajador español. “Claras reminiscencias de las políticas y tácticas desarrolladas por el régimen fascista de Franco contra Gibraltar en la década de los 50 y los 60”, afirma irritado el Gobierno local. En todo caso, una política “vintage” —tal y como se mofa El País—, que la oposición española considera, de forma un tanto precipitada, una cortina de humo frente al caso Bárcenas, el escándalo de corrupción del que adolece el Gobierno de Rajoy.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573

OPINION: REVIEW & OUTLOOK

Congress's ObamaCare Exemption

To adapt H.L. Mencken, nobody ever went broke underestimating the cynicism and self-dealing of the American political class. Witness their ad-libbed decision, at the 11th hour and on the basis of no legal authority, to create a special exemption for themselves from the ObamaCare health coverage that everybody else is mandated to buy.

The Affordable Care Act requires Members of the U.S. Congress and their staffs to participate in its insurance exchanges, in order to gain first-hand experience with what they're about to impose on their constituents. Harry Truman enrolled as the first Medicare beneficiary in 1965, and why shouldn't the Members live under the same laws they pass for the rest of the country?

That was the idea when Iowa Senator Chuck Grassley proposed the original good-enough-for-thee, good-enough-for-me amendment in 2009, and the Finance Committee unanimously adopted his rule. Declared Chairman Max Baucus, "I'm very gratified that you have so much confidence in our program that you're going to be able to purchase the new program yourself and I'm confident too that the system will work very well."

Harry Reid revised the Grassley amendment when he rammed through

his infamous ObamaCare bill that no one had read for a vote on Christmas eve. But he neglected to include language about what would happen to the premium contributions that the government makes for its employees. Whether it was intentional or not, the fairest reading of the statute as written is that if Democrats thought somebody earning \$174,000 didn't deserve an exchange subsidy, then this person doesn't get a subsidy merely because he happens to work in Congress.

But the statute means that about 11,000 Members and Congressional staff will lose the generous coverage they now have as part of the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Instead they will get the lower-quality, low-choice "Medicaid Plus" of the exchanges. The Members—annual salary: \$174,000—and their better paid aides also wouldn't qualify for ObamaCare subsidies. That means they could be exposed to thousands of dollars a year in out-of-pocket insurance costs.

The result was a full wig out on Capitol Hill, with Members of both parties fretting about "brain drain" as staff face higher health-care costs. Democrats in

particular begged the White House for help, claiming the Reid language was merely an unintentional mistake. President Obama told Democrats in a closed-door meeting last week that he would personally moonlight as HR manager and resolve the issue.

The President intervenes to give Members and staff a break.

And now the White House is suspending the law to create a double standard. The Office of Personnel Management (OPM) that runs federal benefits will release regulatory details this week, but leaks to the press suggest that Congress will receive extra payments based on the FEHBP defined-contribution formula, which covers about 75% of the cost of the average insurance plan. For 2013, that's about \$4,900 for individuals and \$10,000 for families.

How OPM will pull this off is worth watching. Is OPM simply going to cut checks, akin to "cashing out" fringe benefits and increasing wages? Or will OPM cover 75% of the cost of the ObamaCare plan the worker chooses—which could well be costlier than what the feds now contribute via current FEHBP plans? In any case the carve-out for Congress creates a two-tier exchange system, one for

the great unwashed and another for the politically connected.

This latest White House night at the improv is also illegal. OPM has no authority to pay for insurance plans that lack FEHBP contracts, nor does the Affordable Care Act permit either exchange contributions or a unilateral bump in congressional pay in return for less overall compensation. Those things require appropriations bills passed by Congress and signed by the President.

But the White House rejected a legislative fix because Republicans might insist on other changes, and Mr. Obama feared that Democrats would go along because they're looking out for number one. So the White House is once again rewriting the law unilaterally, much as it did by suspending ObamaCare's employer mandate for a year. For this White House, the law it wrote is a mere suggestion.

The lesson for Americans is that Democrats who passed ObamaCare didn't even understand what they were doing to themselves, much less to everyone else. But you can bet Democrats will never extend to ordinary Americans the same fixes that they are now claiming for themselves. The real class divide in President Obama's America is between the political class and everyone else.

Spain Squeezes the Rock

A week may be a long time in politics, but sometimes 300 years isn't enough. On July 13, 1713, Spain and Britain concluded the Treaty of Utrecht, in which Spain ceded Gibraltar to the British "for ever, without any exception or impediment whatsoever." Madrid is still dreaming up impediments.

Three centuries on, Madrid still can't accept a British Gibraltar.

The latest eruption started last month with Gibraltar's construction of an artificial reef off its coast. This has had the effect, intended or not, of obstructing Spanish dragnet fishing in the waters around the Rock. Spain has responded by slow-walking border controls with Gibraltar. Spain's foreign minister also suggested his government could impose a €50 fee

for crossing the border—ostensibly to raise money to compensate the fishermen. There's even talk in Madrid of closing Spanish airspace to flights on and off the Rock.

The real disagreement is that Spain doesn't accept that Gibraltar isn't Spanish. The late dictator Francisco Franco closed the border in 1965 and even now it can take hours to cross the border in a car. The Spanish exploit the specter of Gibraltar's tax-free shopping as a pretext for holding up traffic. This concern is as old as Article X of the Treaty of Utrecht, which mentions the danger of smugglers using Gibraltar as a base.

What to do? Gibraltarians overwhelmingly support staying with Britain—by

nearly 99-1 the last time they voted, in 2002. Gibraltar's tax-free status, which puts it within the EU but outside its customs union and its minimum-VAT rules, is critical to the local economy. Becoming another corner of Andalusia would seriously damage Gibraltar as a shopping destination while doing little to help Spain's economic problems.

No doubt the government in Madrid would prefer to bang nationalist drums rather than talk about the national economy, but it's a distraction that leads no-



Nulli expugnabilis hosti.

where. British Prime Minister David Cameron reiterated this week that the U.K. would never negotiate the Rock away as long as its residents wanted to remain British.

With GDP per capita nearly twice that of their neighbors in Spain and 3% unemployment

compared to 26% north of the border, that's unlikely to change any time soon. Maybe the better path is for Spain to try to become more a part of Gibraltar—at least by adopting its low-tax, free-trading economic model.

Six Counts of 'Greed'?

The U.S. Securities and Exchange Commission is doing a victory lap over last week's verdict against former Goldman Sachs trader Fabrice Tourre, but its spin is revealing about the political motivation behind the case. Lead SEC prosecutor Matthew Martens keeps saying again and again that the case was "about Wall Street greed."

Last time we checked, greed is not a crime under the securities laws or any other statutes in the federal code. The SEC did not charge Mr. Tourre with greed, or any other of the seven deadly sins. It leveled seven civil counts related to misleading investors about the nature of a transaction—charges that required

only a preponderance of evidence to find liability, and it persuaded a gullible jury on six of them.

Which is where the "greed" comes in handy for Mr. Martens and his Washington comrades. Greed has existed since man committed original sin, and no doubt it has always existed on Wall Street and most other places. Greed in moderation might even be called ambition. While the media most often attribute it to bonus-seeking traders on Wall Street, greed can exist in other locations, too. Perhaps you have noticed how frequently prosecutors leave their government jobs for higher pay as corporate attorneys. Mr. Martens may eventually be

one of them.

But for the Beltway, Wall Street greed is good—perfect, in fact—because it serves as an all-purpose explanation for the financial crisis. The word can help persuade jurors looking to find someone accountable as a symbol of the crisis. It is also useful because it absolves Washington of its pre-crisis sins. The same political crowd that encouraged Americans to buy houses with easy money and distorted incentives needs to blame the bankers for the crisis, and what better way than to assail their greed. The bankers played their role, but if you believe greed caused the crisis you'll believe anything.

Pepper . . . and Salt

THE WALL STREET JOURNAL



"Look, Jake, I like you, but I can't be your best friend and your agent."

Printed and distributed by NewsstandDirect
www.wallstreetjournal.com ©2013 The Wall Street Journal
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

LE FIGARO Une-FIG

Gibraltar : nouvel accès de fièvre entre Madrid et Londres

Philippe Gélie; pgelie@lefigaro.fr

121 words

6 August 2013

Le Figaro

FIGARO

C

1

21463

French

(c) Copyright 2013 Le Figaro.

Pour quelques blocs de béton jetés dans la mer, la petite guerre que se livrent Madrid et Londres autour du rocher de Gibraltar est en passe de se rallumer. L'Espagne a pris fait et cause pour ses pêcheurs et multiplie les tracasseries contre les résidents de l'enclave britannique de 7 km² située à la pointe sud de la péninsule Ibérique. Les conservateurs espagnols, qui ont adopté le slogan « ¡ Gibraltar español ! » depuis leur accession au pouvoir en 2011, sont accusés par la Grande-Bretagne de prendre des mesures « disproportionnées ». « Sérieusement préoccupé », Londres souhaite « une explication ».

PAGE 5

LE FIGARO International

Gibraltar : la guerre du rocher relancée

Mathieu de Taillac

Mathieu de Taillac@mdetaillacMadrid @mdetaillac Madrid

582 words

6 August 2013

Le Figaro

FIGARO

C

5

21463

French

(c) Copyright 2013 Le Figaro.

Prenant fait et cause pour ses pêcheurs, Madrid multiplie les mesures de rétorsion contre l'enclave britannique.

ESPAGNE Des blocs de béton provoquent la crispation des Espagnols, des Britanniques et des 30 000 habitants locaux autour d'un territoire de moins de 7 km² : Gibraltar. Madrid parle de « fin de la récréation », Londres menace de prendre « toutes les mesures possibles » et les autorités de la presqu'île dénoncent des « réminiscences du régime fasciste de Franco ». L'enclave du Royaume-Uni à l'extrême sud de l'Espagne, serpent de mer des relations entre les deux pays depuis sa cession en 1713, connaît depuis une semaine une surenchère de déclarations patriotiques, de bombements de torse et de coups de menton.

À l'origine, la décision du gouvernement local de jeter à la mer 70 blocs de béton hérissés de piques. Il s'agit, dit Gibraltar, de créer un récif artificiel pour empêcher le chalutage et attirer les poissons. La technique a d'ailleurs été utilisée par les Espagnols au large de la commune voisine de La Línea de La Concepción.

Les pêcheurs espagnols, habitués à être les victimes collatérales du conflit séculaire, y voient une mesure destinée à les empêcher de travailler dans les eaux de Gibraltar, dont la souveraineté est disputée. Et le gouvernement de Mariano Rajoy a fait siennes leurs doléances. Depuis leur arrivée au pouvoir en novembre 2011, les conservateurs espagnols ont récupéré le vieux cri de « Gibraltar español! », auquel est sensible leur électorat traditionnel.

Mesures « disproportionnées »

Au-delà des mots, Madrid a pris une série de décisions qui ressemblent à s'y méprendre à des mesures de rétorsion. D'abord en surveillant de près la Verja (la grille), la frontière franchie chaque jour par des milliers de personnes. Multiplier les contrôles prolonge d'autant les files d'attente (jusqu'à 6 heures de queue la semaine dernière). La technique, simple, efficace et légale, est un grand classique sur El Peñón (le Rocher). « Notre obligation est de contrôler fermement la contrebande, le blanchiment d'argent et le trafic illicite », assure le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel García Margallo, dans une interview au quotidien ABC. Comme si, s'amuse El País, Gibraltar était « une caverne de pirates, un nid de contrebandiers et un paradis pour les fraudeurs ».

En outre, Madrid a bloqué le passage d'une demi-douzaine de bétonneuses à la frontière et a dénoncé les entreprises impliquées à la justice espagnole et à la Commission européenne. García Margallo a lancé l'idée d'imposer une taxe de 50 euros pour l'entrée et la sortie de chaque véhicule. Un impôt justifié par les embouteillages provoqués à la frontière... par les contrôles de la police espagnole ! Le gouvernement espagnol menace également de renforcer les contrôles fiscaux, de réviser la concession de 60 000 lignes téléphoniques, de réguler le commerce florissant des paris en ligne ou encore de restreindre le trafic aérien.

Autant de mesures « disproportionnées », dit Londres, qui a convoqué l'ambassadeur espagnol. « De claires réminiscences des politiques et tactiques développées contre Gibraltar par le régime fasciste de Franco dans les années 1950 et 1960 », s'emporte le gouvernement local. Une politique « vintage », en tout cas, se

moque El País, que l'opposition espagnole considère un peu vite comme un contre-feu à l'affaire Bárcenas, le scandale de corruption qui empoisonne le gouvernement Rajoy.